

(S-2347/2020)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º.- Objeto. La presente ley tiene como objeto garantizar la formación integral respecto de la Causa Malvinas para las personas que se desempeñen en la función pública.

Artículo 2º.- Definición. A los fines de la presente ley se entiende por:

CAUSA MALVINAS a la disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por las Islas Malvinas, Georgias Del Sur, Sandwich Del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares Correspondientes

Artículo 3º.- Capacitación obligatoria en la Causa Malvinas. Establécese la capacitación obligatoria en la Causa Malvinas para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación; con especial énfasis en el reclamo legítimo por la restitución de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.

Artículo 4º.- Lineamientos generales. La autoridad de aplicación deberá establecer, dentro de los noventa (90) días posteriores a la entrada en vigencia de la presente ley, los lineamientos generales destinados a las capacitaciones resultantes de lo establecido en la presente, procurando que dichos lineamientos incorporen tanto las dimensiones de sensibilización como de transmisión de conocimientos.

Artículo 5º.- Participación pública. La autoridad de aplicación deberá garantizar la participación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares correspondientes, creado mediante Ley N°27558; las instituciones del sector académico y científico especializados en la materia, así como de la sociedad civil y sus organizaciones, en el marco del proceso de confección de los lineamientos generales establecidos en el artículo precedente.

Artículo 6º.- Información. Los lineamientos generales deberán contemplar, como mínimo, información referida a los argumentos históricos, geográficos y diplomáticos que esgrime la Nación Argentina, en relación con la Causa Malvinas, así como también deberán contemplar información relativa a la normativa nacional e internacional vigente.

Artículo 7º.- Metodología. Las personas referidas en el artículo 3º, deben realizar las capacitaciones en el modo y forma que establezcan los respectivos organismos a los que pertenecen.

Artículo 8º.- Implementación. Las máximas autoridades de los organismos dependientes de los poderes referidos en el artículo 3º, con la colaboración de sus áreas u oficinas competentes, si estuvieren en funcionamiento, son responsables de garantizar la implementación de las capacitaciones, que comenzarán a impartirse dentro del año de la entrada en vigencia de la presente ley.

Para tal fin, los organismos públicos, podrán realizar adaptaciones de materiales y/o programas existentes, o desarrollar uno propio, debiendo regirse por los lineamientos generales establecidos de acuerdo con los artículos 4º y 6º, así como por la normativa, recomendaciones y otras disposiciones que establecen al respecto los instrumentos internacionales vinculados a la temática de la Causa Malvinas suscriptos por el país. La información comprendida deberá ser clara, precisa y de base científico-legal, debiendo ajustarse al organismo y al contexto en el que se brinde.

El material desarrollado por la autoridad de aplicación será de libre disponibilidad, contemplando su difusión y circulación para actividades de capacitación que quisieran replicarse en jurisdicciones públicas provinciales o municipales, así como en otros ámbitos privados de la República Argentina.

Artículo 9º.- Certificación. La autoridad de aplicación certificará la calidad de las capacitaciones que elabore e implemente cada organismo, que deberán ser enviadas dentro de los noventa (90) días siguientes a la confección de los lineamientos generales, pudiéndose realizar modificaciones y sugerencias para su mayor efectividad.

Artículo 10º.- Acceso a la información. La autoridad de aplicación, en su página web, deberá brindar acceso público y difundir el grado de cumplimiento de las disposiciones de la presente en cada uno de los organismos dependientes de los poderes referidos en el artículo 3º.

En la página web se identificará a las personas responsables de cumplir con las obligaciones que establece la presente ley en cada organismo y el porcentaje de personas capacitadas, desagregadas según su jerarquía.

La autoridad de aplicación publicará en esta página web un informe anual sobre el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley, incluyendo la nómina de altas autoridades del país que se han capacitado.

Artículo 11.- Presupuesto. Los gastos que demande la presente ley se tomarán de los créditos que correspondan a las partidas presupuestarias de los organismos públicos de que se trate.

Artículo 12.- Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo Nacional designará la autoridad de aplicación de la presente ley.

Artículo 13.- Invítese a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.

Artículo 14.- Invítese al sector privado a adherirse a lo determinado en la presente ley de acuerdo a las estipulaciones que regula su actividad, los Convenios Colectivos y demás regulaciones pertinentes.

Artículo 15.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

María E. Duré.- Alfredo H. Luenzo.- Sergio N. Leavy.- María E. Catalfamo.- Beatriz G. Mirkin.- Ana M. Ianni.- Antonio J. Rodas.-

FUNDAMENTOS

Señora Presidenta:

La Cuestión Malvinas representa la disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por las Islas Malvinas, Georgias Del Sur, Sandwich Del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares Correspondientes.

Dicha disputa se originó el 3 de enero de 1833 cuando el Reino Unido, quebrando la integridad territorial argentina, ocupó ilegalmente las Islas y expulsó a las autoridades impidiendo su regreso. Desde ese año la Argentina ha manifestado el repudio por la toma ilegal de las Islas, ratificando su soberanía y afirmando que su recuperación, conforme el derecho internacional, constituye un objetivo permanente e irrenunciable.

El 14 de diciembre de 1960 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 1514 (XV) “Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales”. Dicha resolución marcó el inicio del proceso de descolonización impulsado por las Naciones Unidas, el cual proclama “la necesidad de poner fin, rápida e incondicionalmente, al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones”; en tanto consagra los dos principios fundamentales que deben guiar el proceso de descolonización: el de libre determinación y el de integridad territorial.

En su párrafo sexto, referido al principio de integridad territorial, la resolución 1514 (XV) establece que “todo intento encaminado a

quebrar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios establecidos por las Naciones Unidas", fijando una clara posición respecto de que allí donde estuviera en riesgo la integridad territorial de los Estados, no debe recurrirse a la aplicación de la libre determinación.

Sin embargo, las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares Correspondientes siguen perteneciendo a los 17 territorios pendientes de descolonización, según el Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para esos asuntos. Por ello, la Cuestión Malvinas ha sido calificada por las Naciones Unidas como un caso especial y particular, en el que subyace una disputa de soberanía y, por ende, a diferencia de los demás casos coloniales tradicionales, no resulta aplicable el principio de libre determinación de los pueblos. Es un claro avasallamiento a la soberanía de la República Argentina.

La controversia de soberanía ha sido reconocida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a partir de la adopción de la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General del 16 de diciembre de 1965, que llama a la República Argentina y al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a proseguir sin demora las negociaciones con el fin de encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía.

Asimismo, el reconocimiento de esta controversia y la necesidad de reanudar las negociaciones bilaterales se ha plasmado en declaraciones de gran cantidad de foros multilaterales globales y regionales.

A su vez, los pilares de la política de Estado respecto de la Cuestión Malvinas se encuentran plasmados en la propia Constitución Nacional, que establece en su Disposición Transitoria Primera que: "La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino."

En este sentido, la República Argentina tiene como objetivo permanente e ineludible la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares Correspondientes; en tanto esta Causa es sinónimo de soberanía, memoria y lucha por lo que se torna necesario reafirmar los derechos argentinos sobre este territorio.

En este marco, el presente proyecto de ley establece la implementación de capacitación obligatoria a fin de generar sensibilización sobre la Causa Malvinas a toda persona que se desempeñe en los tres Poderes del Estado Nacional, entendiendo que dichas herramientas permitirán dotar, directa o indirectamente, a quienes inciden sobre el diseño y aplicación de políticas públicas y de la normativa vigente en nuestro país.

La defensa de los derechos legítimos de nuestro país sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares Correspondientes debe consolidarse como una política de Estado que trascienda a los gobiernos y las perspectivas partidarias o sectoriales.

Por ello, resulta necesario garantizar la continuidad de las estrategias que se llevan adelante para alcanzar los objetivos previstos en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional a través de medios diplomáticos y pacíficos que permitan cumplir con lo prescripto por la Organización de las Naciones Unidas.

Por todo lo antes expuesto pido a mis pares el acompañamiento.

María E. Duré

DIRECCION GENERAL DE PUBLICACIONES